

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 2-
15)**

—

DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 16-29)

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Departament de Territori. Consell Insular de Mallorca

—

Consultor

Universitat Oberta de Catalunya

Sumario: 1. Los primeros anuncios e iniciativas. 1.1. La amenaza de la desprotección. 1.2. Acciones en política ambiental. A. La acción del Gobierno de las Islas Baleares en materia ambiental. B. Las políticas ambientales de los consejos insulares. 2. Actividad legislativa. 2.1. Anuncio de derogaciones. 2.2. El Decreto-Ley 3/2011. 2.3. Otras disposiciones. 3. La noticia destacada: la sierra de Tramuntana de Mallorca declarada Patrimonio Mundial (Unesco). 4. Nuevos acuerdos de ampliación de la red ecológica europea Natura 2000. 5. Novedades en la red de espacios naturales protegidos. 5.1. Propuesta de ampliación del Parque Nacional de Cabrera. 5.2. Décimo aniversario de la declaración del Parque Natural de la Península de Llevant. 5.3. El Inventario de Lugares de Interés Geológico. 6. Otras novedades. 6.1. Un mal año para la conservación de los bosques de Baleares. 6.2. Novedades sobre custodia del territorio.

1. Los primeros anuncios e iniciativas

1.1. La amenaza de la desprotección

Pocas cosas pueden destacarse en la crónica de las Islas Baleares de este mes de diciembre, en el que la agenda política ha estado marcada por el cambio de Gobierno fruto de las elecciones de mayo pasado y por la crisis económica, que ha centrado la mayoría de los debates. El margen de maniobra ha sido muy estrecho y los recortes sociales asociados a los económicos han capitalizado la preocupación ciudadana. Esto último está propiciando debates y pronunciamientos a favor de simplificar la tramitación administrativa, con la consiguiente reducción de plazos, y de promover la exoneración de determinados proyectos con respecto a su sometimiento a las disposiciones en materia de evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, no debe escapar a la observación del analista la ejecución de una serie de movimientos relacionados también con la necesidad de impulsar la economía — productiva y no productiva— de esta Comunidad Autónoma. Algunos anuncios y algunas decisiones ya adoptadas tienen en común la relajación de los controles ambientales —tal y como apuntábamos antes— para agilizar la implantación de nuevas empresas y objetivos, por la necesidad de atraer inversiones y recuperar el sector de la construcción. Basta una revisión de los boletines oficiales para constatar el desbloqueo de numerosas iniciativas mediante “medidas” administrativas dirigidas a agilizar las tramitaciones de proyectos, planes y programas, así como a promover moratorias de aplicación de obligaciones y cargas de todo tipo, empezando por las urbanísticas y continuando por las relacionadas con políticas sectoriales como la agricultura, las costas o el agua, entre otras.

Así, se anuncian nuevas iniciativas para rentabilizar o modernizar puertos deportivos, con alguna desclasificación en el ámbito del interés general y la nueva orientación para usos recreativos desde la gestión privada. También se anuncian facilidades para

construir nuevos campos de golf en las tres islas e infraestructuras de grandes dimensiones como un circuito de automovilismo o grandes parques temáticos; todas estas iniciativas se anuncian como solución a la captación de inversión, a la generación de empleo y a la desestacionalización turística. Sin embargo, buena parte de estas proclamas desoyen la fragilidad del territorio y contravienen regímenes legales, de ordenación territorial o urbanísticos, lo que obliga a modificaciones normativas sustanciales con carácter previo a la implantación de algunas de las propuestas enumeradas genéricamente.

Precisamente los parques temáticos han sido muy comentados, pero una de las medidas anunciadas que más han preocupado en el entorno jurídico y académico ha sido la propuesta de una ley que desbloquee las 1.500 hectáreas de urbanizaciones y otros complejos urbanísticos que fueron desclasificados mediante leyes aprobadas entre los pasados años 2007 y 2008. Además, las nuevas políticas consideran necesario flexibilizar determinados regímenes de uso del suelo rústico para facilitar la implantación de complejos de ocio con la finalidad de reactivar la economía del archipiélago.

Por otro lado, el anuncio de reclasificación también tiene anclaje en las amenazas de reclamaciones millonarias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador con respecto a las mencionadas 1.500 hectáreas protegidas por el Gobierno anterior, así como por determinadas desprogramaciones o eliminación de expectativas en algunos instrumentos de ordenación territorial (como en el caso de las dos recientes modificaciones del Plan Territorial Insular de Mallorca).

Todo ello se puede traducir en la derogación o modificación de algunas leyes proteccionistas, tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Así, se ha hablado concretamente de la derogación del Decreto-Ley 1/2007, que entre otras iniciativas paralizó un complejo de ocio y comercial en Ses Fontanelles, así como de la Ley 4/2008, que incorporó a la lista de áreas naturales de especial interés (ANEI) de la Ley 1/1991, de 30 de enero (LEN), una serie de sectores amenazados de urbanización o con un carácter de urbanizaciones no consolidadas en parajes de interés natural de Mallorca e Ibiza. La Ley 4/2008 se configuró, bajo el nombre de Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible, como una de las leyes estrella de la pasada legislatura.

Algunas de las amenazas de reclamaciones económicas publicadas en los medios hacen referencia a proyectos como los siguientes: Ses Fontanelles, complejo de ocio y comercial en la playa de Palma por el cual los promotores piden 250 millones de euros; Cala Carbó en Pollença, paralización de un proyecto de construcción de viviendas de lujo en plena montaña por la que se reclaman 140 millones; El Vilar de Pollença, urbanización en la ladera de la montaña, los promotores exigen 17 millones por la descalificación; Cala Blanca de Andratx, complejo de viviendas de lujo y un hotel en el puerto de Andratx por el que se reclaman 92 millones; Mon Port de Andratx, pisos de lujo en el puerto de Andratx, ya iniciados, por los que se reclaman 34 millones; Cala Marçal de Felanitx, urbanización en Portocolom por la que se exigen 15 millones; parque temático de Calvià, en terrenos ubicados en Son Ferrer, por el que se reclaman 1,8 millones; Ibiza, urbanizaciones de Roca Llisa, Punta Pedrera, Binirràs y ses Feixes d'Eivissa, que en conjunto suponen la reclamación de 335 millones.

Existen otras amenazas de reclamaciones millonarias por desclasificaciones realizadas en modificaciones de los planes de ordenación territorial (e incluso como consecuencia de la aprobación de los propios planes territoriales insulares). Sin embargo, deben relativizarse las cantidades señaladas a la vista de la doctrina a la que dio lugar la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1987 (número 706) y que marcó un hito en cuanto a la definición de lesión indemnizable en el marco general de la responsabilidad patrimonial de la Administración con respecto al *ius variandi* de los planes urbanísticos o de ordenación del territorio. Como ejemplo reciente podemos referirnos a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de fecha 14 de septiembre de 2011, que rebaja la pretensión inicial de un promotor urbanístico de Menorca, que reclamaba 27,3 millones de euros, a tan solo 69.175 euros. Sobre esta sentencia daremos cuenta en el apartado de análisis jurisprudencial de este mismo número de la RCDA.

En definitiva, parece un tanto precipitado fundamentar en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial una serie de acciones legislativas destinadas a retrotraer situaciones urbanizadoras ya superadas y consolidadas a favor de la protección territorial; la defensa del interés general y la objetividad de la acción de las administraciones públicas (Artículo 103. CE: “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno

a la Ley y al Derecho”.) pueden quedar en entredicho y no añaden valor a la tan cacareada seguridad jurídica, y es que la modificación continua del marco normativo genera cualquier cosa menos seguridad y estabilidad en un determinado statu quo.

1.2. Acciones en política ambiental

A. La acción del Gobierno de las Islas Baleares en materia ambiental

Las medidas de adelgazamiento de la Administración autonómica han conducido a una pérdida de peso específico de la gestión administrativa del medio ambiente, al perderse la Consejería existente a favor de la nueva Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, en la cual la agricultura está ganando la batalla de las prioridades. Probablemente esto sea la consecuencia lógica de haber nombrado consejero a un antiguo dirigente de ASAJA, con una clara predilección por el sector primario.

Sin embargo, una de las acciones de Gobierno que más se han hecho notar en materia ambiental consiste en la agilización de los procedimientos de evaluación ambiental (EIA y EAE). Se ha abierto una vía de no sujeción y exoneración, a la vez que se tratan los expedientes con una celeridad inédita en la Comunidad Autónoma. Probablemente esto sirva como mecanismo facilitador de inversiones en las islas, aunque sea con el coste añadido de perder control sobre los posibles impactos que las instalaciones y actividades y los planes y programas pueden causar al medio.

Como ya vimos, el Gobierno asumió recientemente la gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Ahora se habla de una posible ampliación del Parque con la incorporación de más hábitats marinos de gran valor. La relevancia de este aspecto se destacará en un apartado específico en esta misma crónica.

También sigue abierto el frente de la ampliación de la red ecológica europea Natura 2000 en Baleares, lo que puede valorarse muy positivamente si estas iniciativas acaban haciéndose realidad. Igualmente relevante sería la elaboración de un inventario de lugares de interés geológico para contribuir a la preservación de la geodiversidad de las Islas.

Finalmente, también dedicaremos una nota específica a la celebración del décimo aniversario de la creación del Parque Natural de la Península de Llevant, un hito

histórico que marcó un punto de inflexión en la ampliación de las hectáreas protegidas como ENP en las Islas Baleares y acabó con un déficit histórico.

B. Las políticas ambientales de los consejos insulares

Los primeros meses de legislatura vienen marcados por anuncios de retrocesos en la protección territorial de las Islas, especialmente en Menorca e Ibiza. En lo que concierne a Mallorca, no se han hecho anuncios explícitos en materia de ordenación territorial, salvo en lo que respecta a los cambios en la política de carreteras relativos a algunos proyectos de desdoblamientos, a la prolongación de autopistas y a la reconsideración del segundo cinturón de Palma.

En el resto de temas se percibe cierta parálisis, probablemente condicionada por el calendario electoral, que está marcando la agenda política del denominado “observatorio balear”. Por ello, lo más destacado va a ser la declaración definitiva de la sierra de Tramuntana de Mallorca como Patrimonio Mundial de la Unesco, cuestión a la que dedicaremos un apartado específico por su relevancia.

2. Actividad legislativa

2.1. Anuncio de derogaciones

De momento la actividad legislativa se ha centrado en medidas urgentes de carácter económico, y más allá de las declaraciones ya comentadas —publicadas en la prensa local— relativas a la preparación de una ley que reclasifique una serie de áreas protegidas entre los años 2007 y 2008, no tenemos nada que destacar. Así pues, habrá que esperar a la derogación efectiva del Decreto-Ley 1/2007 y de la Ley 4/2008 mediante una nueva ley de la que se sabe poco a pesar de los intentos por averiguar la línea que se iba a implantar al respecto. Probablemente tengamos noticias concretas a finales de diciembre o principios de enero. La derogación de ambas disposiciones implicaría lanzar un torpedo a la línea de flotación de las iniciativas consolidadas de desarrollo territorial sostenible fruto de la acción del anterior Gobierno (2007-2011).

2.2. *El Decreto-Ley 3/2011*

En una línea próxima a la apuntada en el apartado II.1 anterior, se ha aprobado el Decreto-Ley 3/2011, de 29 de julio, de modificación de los plazos previstos en el artículo 3 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión.

Ya en su momento opinamos que la Ley 10/2010, que tenía un carácter multipropósito transversal al estilo de las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales, era una norma que podría menoscabar la seguridad de los controles ambientales, además de ser un muy mal ejemplo de técnica legislativa que contribuye a alterar la estructura del sistema jurídico bajo el formato de ley multipropósito. Entre otros aspectos, modificaba planes urbanísticos sin someterlos a control ambiental (evaluación ambiental estratégica, que en las Islas Baleares se rige por la Ley 11/2006); relajaba requisitos de prevención de la contaminación como la conexión al alcantarillado de núcleos de población y edificaciones aisladas; alteraba el régimen de zonas afectadas por áreas de protección territorial (Ibiza), y, finalmente, flexibilizaba los requisitos que habían de cumplir los establecimientos hoteleros en suelo rústico.

En el caso concreto de la flexibilización de plazos para autorizar urbanizaciones sin conexión al alcantarillado, afirmamos que esta previsión vulneraba la legislación básica estatal, y más concretamente, en determinados casos, los artículos 9.2 o 14.1.a.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, así como otras disposiciones que obligan a disponer de las conexiones correspondientes a los servicios de agua, luz y alcantarillado para poder tener la condición de parcela edificable, como se establece en el artículo 12 al definir las situaciones básicas del suelo.

La exposición de motivos del Decreto-Ley es bastante explícita al afirmar:

“El artículo 3 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de Medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de Ordenación territorial, Urbanismo y de impulso a la inversión, fijó una normativa transitoria que excepcionaba en determinados supuestos de suelo urbano y urbanizable la necesidad de implantación del servicio de alcantarillado para el otorgamiento de licencias, certificados de finales de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas.

Asimismo, dicho artículo exigía que en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, los Ayuntamientos tenían que haber aprobado definitivamente el pertinente proyecto de urbanización o dotación de servicios que implantara el sistema de alcantarillado, incluyendo las conexiones a los sistemas generales de depuración y, asimismo, las obras mencionadas se debían ejecutar y estar en funcionamiento antes de dos años desde la entrada en vigor de la ley”.

Así pues, los plazos previstos en el artículo 3 de la Ley 10/2010¹ se alargan de la forma siguiente: el plazo de un año a que se refieren la letra a) del punto 1 y el punto 2 pasa a ser de tres años; el plazo de dos años a que se refieren las letras b) y c) del punto 1 y el punto 2 pasa a ser de cuatro años. Estas ampliaciones van a suponer una perpetuación a la larga de la situación irregular de contar con edificaciones y urbanizaciones sin dotaciones de servicios, cuando se establece que se podrán otorgar licencias, certificados de final de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares

¹ “Artículo 3. Regulación de las exenciones del servicio de alcantarillado.

1. En las áreas de suelo urbano o urbanizable de uso predominantemente residencial y de tipología unifamiliar aislada que constituyan o hayan constituido una unidad de actuación, un polígono o un sector en que, de conformidad con el planeamiento general o con su plan parcial, vigente en el momento en que se desarrolló el ámbito, no estuviese previsto que la evacuación de aguas residuales se hiciese por el sistema de alcantarillado o su dotación se encuentre pendiente de ejecución, y sin perjuicio de la existencia del resto de servicios urbanísticos básicos previstos en el artículo 2.1 de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible de las Illes Balears, se podrán otorgar licencias, certificados de final de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas, siempre que se prevean sistemas provisionales de depuración de aguas residuales de carácter individual como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas y se den las condiciones, dentro de los plazos siguientes:

a) Durante el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la única condición para otorgar las licencias será disponer del informe favorable a que se hace referencia en este precepto. Durante este plazo los ayuntamientos deberán aprobar definitivamente el proyecto de urbanización o dotación de servicios que implante el sistema de alcantarillado, incluyendo las conexiones a los sistemas generales de depuración.

b) Las obras previstas en el apartado anterior se deben ejecutar y deben estar en funcionamiento antes de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta ley.

c) Al finalizar el plazo de dos años se deberán haber conectado al servicio de alcantarillado todas las edificaciones incluidas en las áreas de suelo urbano o urbanizable de uso predominante residencial y de tipología unifamiliar aislada que constituyan una unidad de actuación, un polígono o un sector.

d) Dentro del procedimiento de otorgamiento de nuevas licencias de edificación deberá constar la conformidad de la administración competente en materia de recursos hídricos. En ningún caso se podrán otorgar las nuevas licencias de edificación ubicadas en zonas con riesgo de contaminación de acuíferos o riesgo geológico.

2. Transcurrido el primer plazo de un año sin que se hayan aprobado los correspondientes proyectos de urbanización, de dotación de servicios y de conexión a los sistemas generales y, en todo caso, después del plazo señalado de dos años, no se podrán otorgar licencias hasta que no se haya subsanado la falta del servicio de alcantarillado, incluyendo la conexión de todas las edificaciones comprendidas en las citadas áreas”.

aisladas siempre que se prevean sistemas provisionales de depuración de aguas residuales de carácter individual como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas. No sabemos cómo se va a garantizar la conexión en los nuevos plazos establecidos si, una vez vencidos los plazos iniciales de la Ley 10/2010, ni siquiera se habían iniciado los consiguientes procedimientos de dotación. Ahora, en un contexto de crisis económica, el panorama es, si cabe, más incierto.

Por otro lado, la exoneración de facto que se realiza a la obligación de conectarse a las redes de alcantarillado puede implicar la vulneración de disposiciones europeas como la Directiva Marco en materia de aguas —Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas—, además de otras normativas como las que regulan aspectos en materia de contaminación del suelo.

2.3. Otras disposiciones

Decreto 91/2011, de 2 de septiembre, de modificación del Decreto 29/2009, de 8 de mayo, de organización, funciones y régimen jurídico de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears.

Aprobación Definitiva del Reglamento del Consejo de Caza de Formentera (BOIB núm. 101, de 2 de julio de 2011).

Decreto 82/2011, de 22 de julio, por el que se modifican el Decreto 69/1997, de 21 de mayo, de creación y régimen jurídico del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT); el Decreto 115/2005, de 11 de noviembre, por el que se establece la organización y el régimen jurídico de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), y el Decreto 71/2006, de 28 de julio, de creación, de organización y régimen jurídico de la empresa pública Espacios de Naturaleza Balear.

Decreto 61/2011, de 20 de mayo, de declaración de área de rehabilitación integral Playa de Palma-Arenal de Palma, Les Meravelles, La Ribera, Can Pastilla-Ses Fontanelles, en el marco del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Decreto 60/2011, de 20 de mayo, de declaración de área de rehabilitación integral Playa de Palma, Arenal de Lluçmajor, en el marco del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2011 por el cual se aprueba el sistema de indicadores de sostenibilidad para la elaboración de la memoria de las Directrices de Ordenación del Territorio de las Islas Baleares (DOT)².

3. La noticia destacada: la sierra de Tramuntana de Mallorca declarada patrimonio mundial (Unesco)

Finalmente se confirmó la noticia y la sierra de Tramuntana de Mallorca³ ha sido declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de “paisaje cultural”. La sierra era la única candidatura española presentada este año a la consideración del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, que en esta edición valoró un total de 35 propuestas de lugares naturales y culturales.

La sierra ocupa el litoral norte de la isla y tiene una fuerte significación cultural, ambiental e incluso espiritual para Mallorca y sus habitantes, incluidos algunos ilustres visitantes que se quedaron prendados de su belleza y características, como Chopin o George Sand, el archiduque Luis Salvador, Miguel de Unamuno o, más recientemente, Robert Graves, Josep Pla, Anglada Camarasa o Camilo José Cela, entre otros muchos. También fue ensalzada por Ramon Llull, Joan Alcover o Miquel Costa i Llobera. Precisamente por estos motivos, el Consell de Mallorca promovió su candidatura para incorporarla a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Debe recordarse que la sierra era candidata a ser declarada Patrimonio desde 1996, cuando fue incluida en una relación previa de posibles declaraciones aprobada por el Ministerio de Cultura y reconocida por la Unesco.

² Las vigentes DOT son las aprobadas por la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias.

³ La sierra de Tramuntana es un ejemplo de creación de un paisaje singular gracias al trabajo durante siglos de distintas generaciones y culturas, y está considerado como uno de los enclaves naturales de más valor de las Baleares, con una superficie en torno a las 80.000 hectáreas. Los valores excepcionales que representa, tanto desde un punto de vista estético, etnológico y cultural, como físico, biológico y científico, hacen de este lugar un espacio único y avalan la candidatura de la sierra para formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Véase: <http://www.serradetrantana.net/ca/>

Podemos destacar que la sierra de Tramuntana es un ejemplo excepcional de paisaje modelado por el hombre durante siglos. Sorprenden los sistemas hidráulicos tradicionales y el uso de la piedra en seco para hacer bancales y obtener espacios de cultivo en una topografía casi imposible. A partir de la combinación de la cultura islámica, gran concedora del control del agua, y de la cultura cristiana, que impulsó hasta límites casi imposibles la agricultura de secano basada en el aceite y la viña, se fue creando el paisaje que todavía hoy perdura magníficamente conservado.

La inclusión de la sierra en la Lista del Patrimonio Mundial se produjo el pasado día 27 de junio de 2011 por acuerdo del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco y tras los preceptivos informes favorables de ICOMOS⁴, organismo responsable de los lugares y monumentos históricos en el mundo que se encarga de supervisar en nombre de la Unesco los valores de las candidaturas presentadas a Patrimonio Mundial.

4. Nuevos acuerdos de ampliación de la red ecológica europea Natura 2000

La red Natura 2000 ha sido ampliada mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 29 de abril de 2011, sobre la iniciación del procedimiento de aprobación de las ampliaciones de la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en cuanto al hábitat ‘Puig Malet y Santa Eularieta’ (LIC ES5310126) en Menorca.

El Acuerdo se publicó en el BOIB núm. 67, de 5 de mayo de 2011. En el propio Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 42/2007, se establece un régimen de protección preventiva de la zona propuesta como LIC que garantice que no se producirá una reducción del estado de conservación de sus hábitats y de sus especies hasta el momento de su declaración formal.

Los hábitats y las especies de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, que están presentes en el ámbito de la finca de Santa Eularieta propuesta como LIC son los siguientes:

3.120, aguas oligotróficas con un contenido muy bajo de minerales en suelos arenosos del Mediterráneo occidental con comunidades de Isoetales sp. pl; 3.170, estanques temporales mediterráneos; 3.290, torrentes mediterráneos de curso temporal del

⁴ <http://www.icomos.org/>

Paspalo-Agrostidion; 5.330, matorral termomediterráneo y predesértico; 6.220, céspedes pseudoestépicos con anuales del Thero-Brachypodietea; 6.420, prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion; 8.220, pendientes rocosas silíceas con vegetación rupícola; 9.320, acebuche; 9.340, encinares; *Emys orbicularis*; y *Testudo hermanni*.

5. Novedades en la red de espacios naturales protegidos

5.1. Propuesta de ampliación del Parque Nacional de Cabrera

Como hemos avanzado en la introducción, se ha puesto sobre la mesa la posible ampliación del ámbito marino del Parque Nacional de Cabrera; con esta decisión del Patronato del Parque Nacional se contribuirá a que España avance hacia la conservación del 10% de las aguas bajo su jurisdicción, como determina el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.

Se ha publicado que varias organizaciones ecologistas han felicitado al Patronato del Parque Nacional de Cabrera, en el que están representados desde los pescadores hasta la Administración, por el acuerdo alcanzado, que recomienda impulsar los trabajos dirigidos a la ampliación de los límites del Parque. Debe destacarse que la propuesta de ampliación es el resultado de los estudios realizados por Oceana —una ONG conservacionista— durante varios años en los alrededores del Parque, donde se han hallado importantes hábitats dignos de ser incluidos bajo esta figura de protección, la más alta de las existentes para la protección de la biodiversidad. Uno de los objetivos de la ampliación sería erradicar en la zona ampliada determinadas prácticas pesqueras de arrastre que provocan daños irreversibles en los fondos marinos. Así, la ampliación de Cabrera supondrá la protección de hábitats extraordinariamente productivos hallados fuera de los límites del actual Parque y ahora amenazados por técnicas agresivas de pesca. Igualmente, la ampliación de las aguas del Parque hacia zonas de gran profundidad facilitará el cumplimiento de la Ley de Parques Nacionales, que indica que en la red de parques deben incluirse ecosistemas como los escarpes marinos que recoge la propuesta de Oceana.

Las organizaciones conservacionistas GOB, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y SEO-Birdlife han apoyado plenamente la propuesta presentada por Oceana a través de

sus representantes en el Patronato y de sus manifestaciones a los medios de comunicación.

5.2. Décimo aniversario de la declaración del Parque Natural de la Península de Llevant

El Parque Natural de la Península de Llevant cumple diez años desde que fuera declarado por el Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 2001, declaración que entró en vigor el 22 de noviembre de ese mismo año. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Península de Llevant (PORN) fue aprobado por el mencionado Acuerdo del Consejo de Gobierno. La norma de declaración del Parque Natural fue el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, que procedió a la declaración del Parque Natural de la Península de Llevant y de las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu.

La superficie inicial del Parque Natural y de las dos reservas naturales que incluía fue de 16.233,89 hectáreas terrestres, además de 5.275,32 hectáreas marinas, lo que sumaba un total de 21.509,21 hectáreas protegidas. El tamaño y la concepción de este parque natural supusieron un hito en la historia de la conservación de las Islas Baleares, que nunca antes habían declarado tal cantidad de superficie bajo una figura de espacio natural protegido de la legislación sectorial de espacios naturales. Lamentablemente, en el año 2003, mediante la disposición adicional 16.^a de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas —que entró en vigor el 1 de enero de 2004—, se produjo una modificación sustancial en lo que respecta a la superficie protegida del Parque Natural de la Península de Llevant. Así, aunque se mantuvo la delimitación original de las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu, el espacio protegido se redujo a 1.407,09 hectáreas terrestres (un 8% de la superficie original).

La mencionada disposición estableció:

“1. A partir de la entrada en vigor de esta ley, el Parque Natural de la Península de Llevant queda limitado a la extensión de las fincas públicas de Aubarca, es Verger y sa Alqueria Vella, propiedad de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares. Se mantienen las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu, de acuerdo con la delimitación y régimen jurídico establecido en el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, por el cual se declaran el Parque Natural de la Península de Levante y las Reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu.

2. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior de esta disposición, los propietarios de fincas privadas incluidas dentro de la delimitación del Parque Natural de Levante previa a la entrada en vigor de esta ley, podrán solicitar, voluntariamente, la inclusión de la finca al ámbito del parque, la cual tendrá lugar mediante convenio suscrito entre el propietario y el Gobierno de las Islas Baleares. La firma del convenio y la consiguiente inclusión dentro del ámbito del Parque dará derecho a acogerse al programa de ayudas que, si procede, se apruebe por orden del consejero competente en materia de medio ambiente”.

Podríamos concluir que no hay motivo para demasiada celebración y que, en realidad, el décimo aniversario del Parque Natural, tal y como está configurado en la actualidad, debería sustituirse por la triste fecha de 1 de enero de 2004, que otorga al Parque el cuestionable mérito de haber sido uno de los primeros parques naturales españoles en ver drásticamente reducida su superficie de protección inicial.

5.3. El Inventario de Lugares de Interés Geológico

Como también se ha avanzado en la introducción, nos hacemos eco de la siguiente novedad relativa al impulso, por parte de la extinta Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, de la tramitación del Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG). El listado recoge un centenar de elementos geológicos de las Islas Baleares, algunos de los cuales se encuentran entre los más relevantes a escala estatal y mundial. El procedimiento de tramitación del Inventario contará con un período de información pública y de audiencia a los interesados.

Aunque existen algunos antecedentes en las Islas Baleares, que ya disponían de un listado del patrimonio geológico —gracias a los libros *Islas de agua* y *Los caminos del agua en las Islas Baleares*, ambos editados por la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)—, el Inventario de LIG posibilitará, además, la formulación de medidas de preservación a través de un plan de gestión o de las figuras de protección necesarias para evitar su destrucción o alteración negativa. Por otro lado, el Inventario posibilitará la divulgación y el uso educativo de los LIG. La presencia de un LIG en una zona condicionará los estudios de impacto ambiental y los proyectos de ordenación urbanística y del territorio y los de infraestructuras.

Parece necesario destacar que en Baleares se ha realizado un notable esfuerzo de inventariado y caracterización del patrimonio geológico —representativo de la denominada geodiversidad— que hasta ahora no ha quedado reflejado en figuras normativas ni de protección. Por otro lado, la Dirección General de Recursos Hídricos ha elaborado un catálogo de cuevas que tienen valores patrimoniales geológicos. Queda pendiente su valoración para seleccionar aquellas que puedan ser incluidas en el Inventario de LIG. Con el Inventario de LIG esta deficiencia se corrige y se da respuesta a las previsiones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo anexo VIII recoge la geodiversidad del territorio español e inspira la lista balear que comentamos.

6. Otras novedades

6.1. Un mal año para la conservación de los bosques de Baleares

El azote de los incendios forestales ha alcanzado este año un triste récord en el archipiélago, donde se han contabilizado (hasta el 1 de noviembre de 2011) 157 siniestros, con una afectación de 2.504,67 hectáreas quemadas. La situación de peligrosidad obligó a prorrogar la temporada de incendios hasta el 31 de octubre (excepto para la isla de Menorca). El balance final cuantitativo y cualitativo no se ha elaborado todavía, aunque tanto por la superficie afectada como por las características de los terrenos quemados puede avanzarse que ha sido —al igual que en el resto del Estado— un mal año.

6.2. Novedades sobre custodia del territorio

Impulsados por la ICTIB (*Impuls a la Custòdia del Territori a les Illes Balears*), se han celebrado diferentes eventos, como los Talleres de Diseño y Negociación de Acuerdos de Custodia (realizados en Mallorca, Menorca e Ibiza); las Jornadas de Turismo Rural Responsable, realizadas en Mallorca el día 17 de octubre de 2011, o la Primera Jornada de Mujeres Payesas, organizada por el GOB el día 22 de octubre de 2011 en Menorca. Todas estas iniciativas se enmarcan en la consolidación que está experimentando el movimiento por la custodia del territorio en las islas Baleares, que se está convirtiendo en un referente a nivel del Estado español.

Sumari: 1. Els primers anuncis i les primeres iniciatives. 1.1. L'amença de la desprotecció. 1.2. Accions en política ambiental. A. L'acció del Govern de les Illes Balears en matèria ambiental. B. Les polítiques ambientals dels consells insulars. 2. Activitat legislativa. 2.1. Anunci de derogacions. 2.2. El Decret llei 3/2011. 2.3. Altres disposicions. 3. La notícia destacada: la serra de Tramuntana de Mallorca declarada patrimoni mundial (UNESCO). 4. Nous acords d'ampliació de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000. 5. Novetats en la xarxa d'espais naturals protegits. 5.1. Proposta d'ampliació del Parc Nacional de Cabrera. 5.2. Desè aniversari de la declaració del Parc Natural de la Península de Llevant. 5.3. L'Inventari de llocs d'interès geològic. 6. Altres novetats. 6.1. Un any dolent per a la conservació dels boscos de les Balears. 6.2. Novetats sobre custòdia del territori.

1. Els primers anuncis i les primeres iniciatives

1.1. L'amença de la desprotecció

En la crònica de les Illes Balears d'aquest mes de desembre no podem destacar gaires coses. L'agenda política ha estat marcada pel canvi de govern fruit de les eleccions del maig i per la crisi econòmica, que ha centrat la majoria de debats. El marge de maniobra ha estat molt estret, i les retallades socials associades a les retallades econòmiques han capitalitzat la preocupació ciutadana. Això propicia debats i pronunciaments a favor de simplificar la tramitació administrativa, amb la consegüent reducció de terminis, i de promoure l'exoneració de determinats projectes respecte al seu sotmetiment a les disposicions en matèria d'avaluació d'impacte ambiental.

No obstant això, no ha d'escapar de l'observació de l'analista l'execució d'una sèrie de moviments també relacionats amb la necessitat d'impulsar l'economia —productiva i no productiva— d'aquesta comunitat. Alguns anuncis i algunes decisions ja adoptades tenen en comú la relaxació dels controls ambientals —tal com apuntàvem abans— per agilitzar la implantació de noves empreses i objectius, amb la necessitat d'atraure inversions i recuperar el sector de la construcció. Només cal revisar els butlletins oficials per constatar el desbloqueig de nombroses iniciatives mitjançant “mesures” administratives dirigides a agilitzar les tramitacions de projectes, plans i programes, i per promoure moratòries d'aplicació d'obligacions i càrregues de qualsevol tipus, començant per les urbanístiques i continuant per les relacionades amb polítiques sectorials com l'agricultura, les costes, l'aigua, entre altres.

Així s'anuncien noves iniciatives per rendibilitzar o modernitzar ports esportius, amb alguna desclassificació en l'àmbit de l'interès general i la nova orientació per a usos recreatius des de la gestió privada. També s'anuncien facilitats per construir nous camps de golf a les tres illes, alguna infraestructura de grans dimensions com un circuit d'automobilisme o la implantació de grans parcs temàtics; totes aquestes iniciatives

s'anuncien com a solució a la captació d'inversió, a la generació d'ocupació i a la desestacionalització turística; no obstant això, bona part d'aquestes proclames desoeixen la fragilitat del territori i contravenen règims legals, d'ordenació territorial o urbanístics, la qual cosa obliga a modificacions normatives substancials amb caràcter previ a la implantació d'algunes de les propostes enumerades genèricament.

Precisament, els parcs temàtics han fet parlar molt, però una de les mesures anunciades que més han preocupat en l'entorn jurídic i acadèmic ha estat la proposta d'una llei que desbloquegi les 1.500 hectàrees d'urbanitzacions i altres complexos urbanístics que van ser desclassificats mitjançant lleis aprovades entre els anys 2007 i 2008. Les noves polítiques consideren, a més, que cal flexibilitzar determinats règims d'ús del sòl rústic per facilitar la implantació de complexos d'oci amb la finalitat de reactivar l'economia de l'arxipèlag.

D'altra banda, l'anunci de reclassificació també s'ancora en les amenaces de reclamacions milionàries de responsabilitat patrimonial de l'estat legislador respecte a les esmentades 1.500 hectàrees protegides pel govern anterior, així com per determinades desprogramacions o eliminació d'expectatives en alguns instruments d'ordenació territorial (com en el cas de les dos modificacions recents del Pla Territorial Insular de Mallorca).

Tot això es pot traduir en la derogació o modificació d'algunes lleis proteccionistes, tal com han publicat alguns mitjans de comunicació. Així, s'ha parlat concretament de la derogació del Decret Llei 1/2007, que, entre altres iniciatives, va paraitzar un complex d'oci i comercial a Ses Fontanelles, així com la Llei 4/2008, que va incorporar a la llista d'àrees naturals d'especial interès (ANEI) de la Llei 1/1991, de 30 de gener (LEN), una sèrie de sectors sota l'amenaça de la urbanització o amb un caràcter d'urbanitzacions no consolidades en paratges d'interès natural de Mallorca i Eivissa. La Llei 4/2008 es va configurar, sota el nom de "lleis de mesures urgents per al desenvolupament territorial sostenible", com una de les lleis estrella de la legislatura passada.

Algunes de les amenaces de reclamacions econòmiques publicades en els mitjans fan referència a projectes com: Ses Fontanelles, complex d'oci i comercial a la Platja de Palma, pel qual els promotors demanen 250 milions d'euros; Cala Carbó a Pollença, paralització d'un projecte de construcció d'habitatges de luxe en plena muntanya, es reclamen 140 milions; El Vilar de Pollença, urbanització en la vessant de la muntanya, els promotors exigeixen 17 milions per la descalcificació; Cala Blanca d'Andratx,

complex d'habitatges de luxe i un hotel al port d'Andratx, es reclamen 92 milions; Monport d'Andratx, pisos de luxe al port d'Andratx començats, es reclamen 34 milions; Cala Marçal de Felanitx, urbanització a Portocolom, s'exigeixen 15 milions; Parc temàtic de Calvià, terrenys ubicats a Son Ferrer, es reclamen 1,8 milions; Eivissa, urbanitzacions de Roca Llisa, Punta Pedrera, Binirràs i Ses Feixes d'Eivissa, que en conjunt suposen la reclamació de 335 milions.

Hi ha altres amenaces de reclamacions multimilionàries per desclassificacions operades en sengles modificacions en els plans d'ordenació territorial (i fins i tot com a conseqüència de l'aprovació dels mateixos plans territorials insulars). No obstant això, han de relativitzar-se les quantitats assenyalades a la vista de la doctrina que va arrancar en la famosa Sentència del Tribunal Suprem de 12 de maig de 1987 (número 706) i que va marcar una fita pel que fa a la definició de lesió indemnitzable en el marc general de la responsabilitat patrimonial de l'Administració respecte a l'*ius variandi* dels plans urbanístics o d'ordenació del territori. Com a exemple recent, podem referir-nos a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 14 de setembre de 2011, que rebaixa la pretensió inicial d'un promotor urbanístic de Menorca, que reclamava 27,3 milions d'euros, a tan sols 69.175 euros. D'aquesta sentència en donarem compte en l'apartat d'anàlisi jurisprudencial d'aquest mateix número de la RCDA.

En definitiva, sembla una mica precipitat fonamentar, en les reclamacions de responsabilitat patrimonial, una sèrie d'accions legislatives destinades a retrotraure situacions urbanitzadores superades i consolidades a favor de la protecció territorial; la defensa de l'interès general i l'objectivitat de l'acció de les administracions públiques [Article 103. CE. "1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho."]] poden quedar en dubte i no afegeixen valor a la seguretat jurídica tan cloquejada, i és que la modificació contínua del marc normatiu genera qualsevol cosa menys seguretat i estabilitat en un statu quo determinat.

1.2. Accions en política ambiental

A. L'acció del Govern de les Illes Balears en matèria ambiental

Les mesures d'aprimament de l'Administració autonòmica han portat a una pèrdua de pes específic de la gestió administrativa del medi ambient, ja que s'ha perdut la Conselleria que hi havia a favor de la nova Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, en la qual l'agricultura està guanyant la batalla de les prioritats. Probablement això respon a la conseqüència lògica d'haver nomenat conseller a un antic dirigent d'ASAJA, amb una predilecció clara pel sector primari.

No obstant això, una de les accions de Govern que més s'han fet notar en matèria ambiental consisteix en l'agilització dels procediments d'avaluació ambiental (EIA i EAE). S'ha obert una via de no-subjecció i exoneració al mateix temps que es tracten els expedients amb una celeritat inèdita a la comunitat autònoma. Probablement això serveix com a mecanisme facilitador d'inversions a les illes encara que sigui amb el cost afegit de perdre control sobre els possibles impactes que les instal·lacions i activitats, i els plans i programes, poden causar sobre el medi.

Com ja vam veure, el Govern va assumir recentment la gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. Ara es parla d'una possible ampliació del parc amb la incorporació de més hàbitats marins de gran valor. La rellevància d'aquest aspecte serà destacada en un apartat específic en aquesta mateixa crònica.

També continua obert el front d'ampliació de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 a les Balears, la qual cosa pot valorar-se molt positivament si realment aquestes iniciatives s'acaben forjant. Igualment rellevant seria l'elaboració de l'inventari de llocs d'interès geològic en la línia de preservar la geodiversitat de les Illes.

Finalment, també dedicarem una nota específica a l'organització del desè aniversari de la creació del Parc Natural de la Península de Llevant, una fita històrica que va marcar un punt d'inflexió en l'ampliació de les hectàrees protegides com a ENP a les Illes Balears i va trencar amb un dèficit històric.

B. Les polítiques ambientals dels consells insulars

Els primers mesos de legislatura estan marcats per anuncis de retrocessos en la protecció territorial de les Illes, especialment a Menorca i Eivissa. Pel que fa a

Mallorca, no s'han fet anuncis explícits en matèria d'ordenació territorial, excepte els canvis en la política de carreteres que sembla que s'obre camí amb alguns projectes de desdoblaments, prolongació d'autopistes i la reconsideració del segon cinturó de Palma.

En la resta de temes assenyallem una certa paràlisi, probablement condicionada pel calendari electoral que marca l'agenda política de l'anomenat "observatori balear". D'aquesta manera, el més destacat és la declaració definitiva de la serra de Tramuntana a Mallorca com a patrimoni mundial de la UNESCO, qüestió a què dedicarem un apartat específic per la seva rellevància.

2. Activitat legislativa

2.1. Anunci de derogacions

De moment l'activitat legislativa s'ha centrat en mesures urgents de caràcter econòmic, i més enllà de les declaracions que ja hem comentat —publicades en la premsa local— relatives a la preparació d'una llei que reclassifica una sèrie d'àrees protegides entre els anys 2007 i 2008, no tenim res a destacar. Així, doncs, cal esperar la derogació efectiva del Decret llei 1/2007 i de la Llei 4/2008, mitjançant una nova llei de què poca cosa en coneixem a pesar dels intents per esbrinar la línia que s'havia d'implantar respecte d'això. Probablement a finals de desembre o principis de gener en tindrem notícies concretes. La derogació d'ambdós disposicions implicaria llançar un torpede a la línia de flotació de les iniciatives consolidades de "Desenvolupament Territorial Sostenible" originades en l'acció de govern anterior (2007-2011).

2.2. El Decret llei 3/2011

En una línia propera a la que hem assenyalat en l'apartat II.1, s'ha aprovat el Decret llei 3/2011, de 29 de juliol, de modificació dels terminis previstos en l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió.

En el moment oportú vam opinar que la Llei 10/2010, que tenia un caràcter multipropòsit transversal, a l'estil de les lleis d'acompanyament dels pressupostos generals, era una norma que podria menyscabar la seguretat dels controls ambientals. A

més de ser un exemple molt dolent de tècnica legislativa que contribueix a alterar l'estructura del sistema jurídic sota el format de llei multipropòsit. D'una banda, modificava plans urbanístics sense sotmetre'ls a control ambiental (avaluació ambiental estratègica, que a les Illes Balears es regeixen per la Llei 11/2006); d'altra banda, relaxava requisits de prevenció de la contaminació com la connexió al clavegueram de nuclis de població i edificacions aïllades; a més, alterava el règim de zones afectades per àrees de protecció territorial (Eivissa), i, finalment, flexibilitzava els requisits que havien de complir els establiments hotelers en sòl rústic.

En el cas concret de la flexibilització de terminis per autoritzar urbanitzacions sense connexió al clavegueram, afirmem que aquesta previsió vulnerava la legislació bàsica estatal, i, més concretament, en determinats casos, els articles 9.2 o 14.1.a.1 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de sòl, així com altres disposicions que obliguen a disposar de les connexions corresponents als serveis d'aigua, llum i clavegueram per poder tenir la condició de parcel·la edificable, com estableix l'article 12, ja que defineix les situacions bàsiques del sòl.

D'altra banda, l'exoneració de facto que es realitza a l'obligació de connectar-se a les xarxes de clavegueram pot implicar la vulneració de disposicions europees com la directiva marc en matèria d'aigües —Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües—, a més d'altres normatives com les que regulen aspectes en matèria de contaminació del sòl.

L'exposició de motius del decret llei és prou explícit, ja que afirma:

“El artículo 3 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de Medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de Ordenación territorial, Urbanismo y de impulso a la inversión, fijó una normativa transitoria que excepcionaba en determinados supuestos de suelo urbano y urbanizable la necesidad de implantación del servicio de alcantarillado para el otorgamiento de licencias, certificados de finales de obra y cédulas de habilidad para viviendas unifamiliares aisladas.

Asimismo, dicho artículo exigía que en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, los Ayuntamientos tenían que haber aprobado definitivamente el pertinente proyecto de urbanización o dotación de servicios que implantara el sistema de alcantarillado, incluyendo las conexiones a los

sistemas generales de depuración y, asimismo, las obras mencionadas se debían ejecutar y estar en funcionamiento antes de dos años desde la entrada en vigor de la ley”,

Així, doncs, els terminis previstos en l'article 3 de la Llei 10/20105 s'allarguen de la forma següent: el termini d'un any a què es refereixen la lletra a) del punt 1 i el punt 2 passa a ser de tres anys; el termini de dos anys a què es refereixen les lletres b) i c) del punt 1 i el punt 2 passa a ser de quatre anys. Aquestes ampliacions suposen una perpetuació a la llarga de la situació irregular de tenir edificacions i urbanitzacions sense dotacions de serveis, quan s'estableix que es poden atorgar llicències, certificats de final d'obra i cèdules d'habitabilitat per a habitatges unifamiliars aïllats, sempre que es prevegin sistemes provisionals de depuració d'aigües residuals de caràcter individual com a depuradores d'aigua o fosses sèptiques estanques i homologades. No sabem com es garantirà la connexió en els nous terminis establerts si, una vegada vençuts els terminis inicials de la Llei 10/2010, ni tan sols s'havien iniciat els consegüents

⁵ “Artículo 3. Regulación de las exenciones del servicio de alcantarillado.

1. En las áreas de suelo urbano o urbanizable de uso predominantemente residencial y de tipología unifamiliar aislada que constituyan o hayan constituido una unidad de actuación, un polígono o un sector en que, de conformidad con el planeamiento general o con su plan parcial, vigente en el momento en que se desarrolló el ámbito, no estuviese previsto que la evacuación de aguas residuales se hiciese por el sistema de alcantarillado o su dotación se encuentre pendiente de ejecución, y sin perjuicio de la existencia del resto de servicios urbanísticos básicos previstos en el artículo 2.1 de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible de las Illes Balears, se podrán otorgar licencias, certificados de final de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas, siempre que se prevean sistemas provisionales de depuración de aguas residuales de carácter individual como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas y se den las condiciones, dentro de los plazos siguientes:

a) Durante el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la única condición para otorgar las licencias será disponer del informe favorable a que se hace referencia en este precepto. Durante este plazo los ayuntamientos deberán aprobar definitivamente el proyecto de urbanización o dotación de servicios que implante el sistema de alcantarillado, incluyendo las conexiones a los sistemas generales de depuración.

b) Las obras previstas en el apartado anterior se deben ejecutar y deben estar en funcionamiento antes de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta ley.

c) Al finalizar el plazo de dos años se deberán haber conectado al servicio de alcantarillado todas las edificaciones incluidas en las áreas de suelo urbano o urbanizable de uso predominante residencial y de tipología unifamiliar aislada que constituyan una unidad de actuación, un polígono o un sector.

d) Dentro del procedimiento de otorgamiento de nuevas licencias de edificación deberá constar la conformidad de la administración competente en materia de recursos hídricos. En ningún caso se podrán otorgar las nuevas licencias de edificación ubicadas en zonas con riesgo de contaminación de acuíferos o riesgo geológico.

2. Transcurrido el primer plazo de un año sin que se hayan aprobado los correspondientes proyectos de urbanización, de dotación de servicios y de conexión a los sistemas generales y, en todo caso, después del plazo señalado de dos años, no se podrán otorgar licencias hasta que no se haya subsanado la falta del servicio de alcantarillado, incluyendo la conexión de todas las edificaciones comprendidas en las citadas áreas”.

procediments de dotació. Ara, en un context de crisi econòmica, el panorama és, si és possible, més incert.

2.3. Altres disposicions

Decret 91/2011, de 2 de setembre, de modificació del Decret 29/2009, de 8 de maig, d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

Aprovació definitiva del Reglament del Consell de Caça de Formentera (BOIB núm. 101, de 2 de juliol de 2011).

Decret 82/2011, de 22 de juliol, pel qual es modifiquen el Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT); el Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), i el Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear.

Decret 61/2011, de 20 de maig, de declaració d'àrea de rehabilitació integral Platja de Palma-Arenal de Palma, Les Meravelles, la Ribera, Can Pastilla-Ses Fontanelles, en el marc del Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012.

Decret 60/2011, de 20 de maig, de declaració d'àrea de rehabilitació integral Platja de Palma, Arenal de Lluçmajor, en el marc del Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012.

Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual s'aprova el sistema d'indicadors de sostenibilitat per a l'elaboració de la memòria de les Directrius d'Ordenació del Territori de les Illes Balears (DOT)⁶.

⁶ Les DOT vigents són les aprovades per la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries.

3. La notícia destacada: la serra de Tramuntana de Mallorca declarada patrimoni mundial (UNESCO)

Finalment s'ha confirmat la notícia i la serra de Tramuntana de Mallorca⁷ ha estat declarada patrimoni mundial per la UNESCO en la categoria de paisatge cultural. La serra de Tramuntana era l'única candidatura espanyola presentada enguany a la consideració del Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO, que aquesta edició ha valorat un total de 35 propostes de llocs naturals i culturals.

La serra de Tramuntana ocupa el litoral nord de l'illa i té una gran significació cultural, ambiental i fins i tot espiritual per a Mallorca i els seus habitants, fins i tot alguns il·lustres visitants es van enamorar de la seva bellesa i de les seves característiques, com Chopin o George Sand, l'arxiduc Lluís Salvador, Miguel de Unamuno o, més recentment, Robert Graves, Josep Pla, Anglada Camarasa o Camilo José Cela, entre molts altres. També la van exaltar Ramon Llull, Joan Alcover o Miquel Costa i Llobera. Precisament per aquests motius, el Consell de Mallorca en va promoure la candidatura per incorporar-la a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Hem de recordar que la serra de Tramuntana és candidata a ser declarada patrimoni des de 1996, quan va ser inclosa en una relació prèvia de possibles declaracions, que va ser aprovada pel Ministeri de Cultura i reconeguda per la UNESCO.

Podem destacar que la serra de Tramuntana és un exemple excepcional d'un paisatge modelat per l'ésser humà durant segles. Sorprenen els sistemes hidràulics tradicionals i l'ús de la pedra en sec per fer bancals i obtenir espais de cultiu en una topografia quasi impossible. De la combinació de la cultura islàmica, gran coneixedora del control de l'aigua, i de la cultura cristiana, que va impulsar fins a límits quasi impossibles l'agricultura de secà basada en l'oli i la vinya, es va anar forjant el paisatge que encara avui perdura magníficament conservat.

La inclusió de la serra de Tramuntana al llistat de Patrimoni Mundial va tenir lloc el passat dia 27 de juny de 2011 mitjançant l'acord del Comitè de Patrimoni Mundial de la

⁷ La serra de Tramuntana és un exemple de creació d'un paisatge singular gràcies al treball durant segles de diferents generacions i cultures, i està considerat com un dels enclavaments naturals de més valor de les Balears amb una superfície entorn de les 80.000 hectàrees. Els valors excepcionals que representa, tant des d'un punt de vista estètic, etnològic i cultural, com físic, biològic i científic, fan d'aquest lloc un espai únic i avalen la candidatura de la serra de per formar part de la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Vegeu: <<http://www.serradetrabantana.net/ca/>>.

UNESCO i després dels preceptius informes favorables d'ICOMOS⁸, organisme responsable dels llocs i monuments històrics al món i que s'encarrega de supervisar en nom de la UNESCO els valors de les candidatures presentades a patrimoni mundial.

4. Nous acords d'ampliació de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000

Hi ha hagut una novetat en l'ampliació de la Xarxa Natura 2000, mitjançant l'Acord del Consell de Govern del dia 29 d'abril de 2011, sobre la iniciació del procediment d'aprovació de les ampliacions de la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) pel que fa a l'hàbitat "Puig Malet i Santa Eularieta" (LIC ES5310126) a Menorca. L'acord es va publicar al BOIB núm. 67 de 5 de maig de 2011. En el mateix acord, de conformitat amb el que estableix l'article 42.2 de la Llei 42/2007, s'estableix un règim de protecció preventiva de la zona proposada com a LIC que garanteix que l'estat de conservació dels seus hàbitats i de les seves espècies no es reduirà fins al moment de la declaració formal.

Els hàbitats i les espècies de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres presents en l'àmbit de la finca de Santa Eularieta proposada com a LIC són els següents:

3120, aigües oligotròfiques amb un contingut molt baix de minerals en sòls arenosos del Mediterrani occidental amb comunitats d'Isoetals sp. pl; 3170, estanys temporals mediterranis; 3290, torrents mediterranis de curs temporal del *Paspalo-Agrostidion*; 5330, matoll termomediterrani i predesèrtic; 6220, gespes pseudoestèpiques amb anuals del *Thero-Brachypodietea*; 6420, herbassars alts mediterranis de sòls humits del *Molinio-Holoschoenion*; 8220, pendents rocosos silicis amb vegetació rupícola; 9320, ullastre; 9340, alzinars; *Emys orbicularis*, i *Testudo hermanni*.

5. Novetats en la xarxa d'espais naturals protegits

5.1. Proposta d'ampliació del Parc Nacional de Cabrera

Com us hem avançat en la introducció, s'ha posat sobre la taula la possible ampliació de l'àmbit marí del Parc Nacional de Cabrera; amb aquesta decisió del Patronat del Parc Nacional es contribueix que Espanya avanci cap a la conservació del 10% de les aigües

⁸ <<http://www.icomos.org/>>.

sota la seva jurisdicció, com determina el Conveni sobre la diversitat biològica de les Nacions Unides.

S'ha publicat que diverses organitzacions ecologistes han felicitat el Patronat del Parc Nacional de Cabrera, entre els qui estan representats des dels pescadors fins a l'Administració, per l'acord assolit pel qual es recomana impulsar els treballs dirigits a l'ampliació dels límits del parc. Hem de destacar que la proposta d'ampliació és el resultat dels estudis realitzats per Oceana —una ONG conservacionista— durant uns quants anys als voltants del Parc, on s'han trobat importants hàbitats dignes de ser inclosos en aquesta figura de protecció, la més alta de les existents per a la protecció de la biodiversitat. Un dels objectius de l'ampliació seria eradicar en l'àmbit de l'ampliació, determinades pràctiques pesqueres d'arrossegament que provoquen danys irreversibles en els fons marins. Així, l'ampliació de Cabrera ha de suposar la protecció d'hàbitats extraordinàriament productius trobats fora dels límits de l'actual parc i actualment amenaçats per tècniques agressives de pesca. Igualment, l'ampliació de les aigües del parc cap a zones de gran profunditat ha de facilitar el compliment de la llei de parcs nacionals, que indica que en la xarxa de parcs han d'incloure's ecosistemes com els escarpaments marins que recull la proposta d'Oceana.

Les organitzacions conservacionistes GOB, Greenpeace, WWF, Ecologistes en Acció i SEO-Birdlife han donat ple suport a la proposta presentada per Oceana, a través dels seus representants en el Patronat i de les manifestacions als mitjans de comunicació.

5.2. Desè aniversari de la declaració del Parc Natural de la Península de Llevant

El Parc Natural de la Península de Llevant compleix deu anys des que va ser aprovat pel Consell de Govern el 9 de novembre de 2001, declaració que va entrar en vigor el 22 de novembre d'aquell mateix any. El Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Península de Llevant (PORN) va ser aprovat per mitjà de l'acord del Consell de Govern esmentat. La norma de declaració del parc natural va ser el Decret 127/2001, de 9 de novembre, que va procedir a la declaració del Parc Natural de la Península de Llevant i de les reserves naturals de Cap Farrutx i Cap des Freu.

La superfície inicial del parc natural i de les dues reserves naturals que incloïa, va ser de 16.233,89 hectàrees terrestres, a més de 5.275,32 hectàrees marines que comprenien un total de 21.509,21 hectàrees protegides. La grandària i concepció d'aquest parc natural

van suposar una fita en la història de la conservació de les Illes Balears que mai abans no havien declarat una quantitat de superfície així sota una figura d'espai natural protegit de la legislació sectorial d'espais naturals. Lamentablement l'any 2003, mitjançant la disposició addicional setzena de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives —que va entrar en vigor l'1 de gener de 2004—, es va produir una modificació substancial de l'àmbit de l'espai natural protegit anomenat Parc Natural de la Península de Llevant, tot i que va mantenir la delimitació original de les reserves naturals de Cap Farrutx i Cap des Freu, que va deixar l'espai reduït a 1.407,09 hectàrees terrestres (un 8% de la superfície original).

La disposició esmentada va establir:

“1. A partir de la entrada en vigor de esta ley, el Parque Natural de la Península de Llevant queda limitado a la extensión de las fincas públicas de Aubarca, es Verger y sa Alqueria Vella, propiedad de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares. Se mantienen las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu, de acuerdo con la delimitación y régimen jurídico establecido en el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, por el cual se declaran el Parque Natural de la Península de Levante y las Reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu.

2. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior de esta disposición, los propietarios de fincas privadas incluidas dentro de la delimitación del Parque Natural de Levante previa a la entrada en vigor de esta ley, podrán solicitar, voluntariamente, la inclusión de la finca al ámbito del parque, la cual tendrá lugar mediante convenio suscrito entre el propietario y el Gobierno de las Islas Baleares. La firma del convenio y la consiguiente inclusión dentro del ámbito del Parque dará derecho a acogerse al programa de ayudas que, si procede, se apruebe por orden del consejero competente en materia de medio ambiente”.

Podríem concloure que la celebració no és tanta i que, en realitat, el desè aniversari del parc natural, tal com està configurat actualment, hauria de traslladar-se a la trista data d'1 de gener de 2004, arrossegant el qüestionable mèrit d'haver estat un dels primers parcs naturals espanyols que van veure dràsticament reduïda la superfície de protecció inicial.

5.3. *L'Inventari de llocs d'interès geològic*

Com també hem avançat en la introducció, ens fem ressò de la següent novetat relativa a l'impuls de la tramitació de l'Inventari de llocs d'interès geològic (LIG) per part de l'anterior Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. El llistat recull un centenar d'elements geològics de les Illes Balears, alguns dels quals es troben entre els més rellevants en l'àmbit estatal i mundial. El procediment de tramitació de l'inventari té un període d'informació pública i d'audiència a les parts interessades.

Tot i que hi ha uns quants antecedents a les Illes Balears que ja disposaven d'un llistat del patrimoni geològic —gràcies als llibres *Illes d'Aigua* i *Els camins de l'aigua de les Illes Balears*, ambdós editats per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, en col·laboració amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME)—, l'Inventari de LIG ha de possibilitar, a més, la formulació d'unes quantes mesures de preservació a través d'un pla de gestió o de les figures de protecció necessàries per evitar-ne la destrucció o alteració negativa. D'altra banda, l'inventari ha de possibilitar la divulgació i l'ús educatiu dels LIG. La presència d'un LIG en una zona condiciona els estudis d'impacte ambiental, els projectes d'ordenació urbanística i del territori, i els d'infraestructures.

Sembla que cal destacar que a les Balears s'ha realitzat un esforç notable a l'hora d'inventariar i caracteritzar el patrimoni geològic —representatiu de l'anomenada geodiversitat— que fins ara no queda reflectit en figures normatives ni de protecció. D'altra banda, la Direcció General de Recursos Hídrics també ha elaborat un catàleg de coves amb valors patrimonials geològics. En queda pendent la valoració per seleccionar les que es puguin incloure en l'Inventari de LIG. Amb l'Inventari de LIG, aquesta deficiència s'ha de corregir i s'ha de donar resposta a les previsions de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que inclou l'annex VIII, que recull la geodiversitat del territori espanyol i que inspira la llista balear que comentem.

6. **Altres novetats**

6.1. *Un any dolent per a la conservació dels boscos de les Balears*

L'assot dels incendis forestals ha deixat un trist rècord a l'arxipèlag, on s'han comptabilitzat (a 1 de novembre de 2011) 157 sinistres amb una afectació de 2,504, 67 hectàrees cremades. La situació de perillositat va obligar a prorrogar la temporada

d'incendis fins al 31 d'octubre (excepte per a l'illa de Menorca). El balanç final quantitatiu i qualitatiu encara no s'ha elaborat, tot i que, tant per la superfície afectada com per les característiques dels terrenys cremats, podem avançar que ha estat —com en la resta de l'Estat— un any dolent.

6.2. Novetats sobre custòdia del territori

Impulsades per l'ICTIB (Iniciatives de Custòdia del Territori de l'Illes Balears), han tingut lloc diferents jornades com els tallers de disseny i negociació d'acords de custòdia (realitzats a Mallorca, Menorca i Eivissa); les Jornades de Turisme Rural Responsable, realitzades a Mallorca el dia 17 d'octubre de 2011; o la Primera Jornada de Dones Pageses realitzada a Menorca sota l'organització del GOV, el dia 22 d'octubre de 2011. Totes aquestes iniciatives s'emmarquen en la consolidació que experimenta el moviment de la Custòdia del Territori a les Illes Balears, les quals s'estan convertint en un referent en l'Estat espanyol.